

Las tierras de Zimbabwe año 2000

En Zimbabwe ha estallado una crisis cuyos antecedentes parecen haber pasado desapercibidos para los medios de comunicación. Cuando finalmente, en abril de 2000, aparece como noticia de primera página, los acontecimientos se han precipitado de tal modo que narrarlos resulta ya demasiado complicado.

Los periodistas han buscado a toda prisa datos en los anuarios, en los libros de referencia, en las informaciones recientes transmitidas por los medios internacionales de mayor difusión, para ofrecernos al final la misma versión de detalles calcados, mientras eluden con destreza un análisis que supere los tópicos de achacar la crisis a la colonización o a las tendencias megalómanas del presidente Mugabe.

De acuerdo con la inveterada tesis, el patente apoyo del Presidente a la ocupación de granjas por supuestos veteranos de la guerra de independencia no es otra cosa que una maniobra electoralista.

Zimbabwe: el poder...

Pero este análisis plantea en sí mismo una paradoja: ¿cómo puede tratarse de una maniobra electoralista si en un referéndum, celebrado en febrero de 2000, el electorado se pronunció en contra de las expropiaciones?

La paradoja es a su vez producto de una doble distorsión: por un lado, se omite en el análisis el nivel de participación en la consulta; por otro, se sobrevalora la importancia que tiene la cláusula sobre expropiaciones contenida en el proyecto de ley objeto del referéndum.

Ciertamente, el borrador de la Constitución fue rechazado por una mayoría de 697.754 votos (55%), en tanto que 578.210 papeletas expresaban el apoyo a la propuesta. La diferencia la marcaban pues 119.544 votos. Sin embargo, se omite un detalle: más de 4 millones de ciudadanos tienen derecho a voto. Y esto significa que la participación fue bastante reducida (1.312.738 votantes o sea alrededor del 31%).

La mayor oposición se registró en los núcleos urbanos, en donde reside alrededor del 30% de la población y en donde se aprecia una mayor oposición al régimen de Mugabe. Harare, la capital con más de un millón de habitantes, y Bulawayo, que con sus más de 600.000 habitantes es la segunda ciudad más grande de Zimbabwe, son además el centro político y económico del país. Allí se ubican la administración del estado, los centros financieros, los medios de comunicación, las oficinas de las grandes compañías mineras, las sedes de las asociaciones de agricultores y ganaderos, etc.

Y aunque en los centros urbanos el aparato del partido en el poder, Zimbabwe African National Union (Unión Nacional Africana de Zimbabwe) o ZANU, sigue teniendo ascendente, este es mucho mayor en las zonas rurales, especialmente en las *Tierras Comunes* que albergan todavía a 5,6 millones de habitantes. Fue aquí donde el movimiento independentista encontró gran parte de su apoyo durante la Guerra de Liberación (1966-1979).

Al igual que en otros países africanos, el hecho de que un partido, en este caso ZANU, luchase por la independencia, accediera democráticamente al poder tras ella

y llevase a cabo la construcción del nuevo estado influyó de forma determinante en el hecho de que muchos ciudadanos identifiquen el partido, el gobierno y el estado.

Tal vez la equivalencia no fuera categórica cuando el país logró la soberanía; pero la aplicación del sistema de partido único —establecido en Zimbabwe *de facto*, nunca *de iure*, pues a esa ambición de Mugabe se ha opuesto incluso el propio ZANU— como medio para consolidar el naciente estado y evitar las fragmentaciones raciales, étnicas y de clase ha contribuido a borrar la línea divisoria entre esos conceptos.

Esta analogía engendra su propia lógica: renunciar a Mugabe es renunciar al partido, porque no hay sucesor; y renunciar al partido es renunciar al estado. Durante años, el propio Mugabe ha sabido aprovecharse de esa lógica y, amparándose en el prestigio de «libertador de la patria», ha obstaculizado la ascensión de cualquier posible sucesor, mientras silenciaba con dureza toda disidencia, tanto dentro como fuera del ZANU.

En esta línea, la intervención de Zimbabwe en la guerra de la R.D. de Congo (antiguo Zaire) también sugiere una lectura vinculada con la política interior del país: es una advertencia de Mugabe a sus conciudadanos sobre los riesgos que implicaría intentar derrocarlo mediante una rebelión popular (como la acaecida en Indonesia), tanto por la fuerza del ejército a su cargo, como por el apoyo que podría recibir de sus vecinos.

Estas maniobras, combinadas con el constante fortalecimiento del aparato del partido, y el reparto de prebendas (contratos de obras públicas, licencias de telefonía móvil, prestaciones a los veteranos de la guerra de liberación) han frenado la consolidación de una consecuentemente siempre incipiente oposición, que además sufre de una crónica fragmentación debida a las divergentes aspiraciones de sus representantes, desde el que fuera Primer Ministro de Rhodesia, Ian Smith, hasta el actual líder del Movement for Democratic Change (Movimiento para el Cambio Democrático) o MDC y antiguo Secretario General de la Unión de Sindicatos, Morgan Tsvingarai.¹

... y la tierra

Pero además, el análisis arriba mencionado sobrevalora la importancia de la cláusula de expropiación que se incluía en el borrador de la Constitución presentado a consulta popular.

Por un lado, otros puntos del borrador eran mucho más controvertidos, como la posibilidad que abría para que Mugabe pudiera presentarse a la reelección en las dos convocatorias siguientes; el riesgo de que los derechos de una persona pudieran ser suspendidos en nombre de la «moralidad pública», o en general la debilidad con que velaría por los derechos humanos de los ciudadanos.

Por otro, si hay algo en lo que está de acuerdo la gente de Zimbabwe es en la necesidad de que la tierra sea redistribuida. Durante el caos de las ocupaciones masivas de granjas a principios de 2000, en el centro de Zimbabwe los granjeros destinaban 45 acres de cada finca a los «veteranos» que las iban ocupando. Los propietarios de fincas están acostumbrados los *squatters* o familias de granjeros sin tierra, que casi desde la independencia se han ido asentando en las explotaciones.

¹ Fallecido en febrero de 2018.

Aunque tales asentamientos ilegales se llevaban a cabo de manera esporádica y pacífica, ya en 1998 se produjeron incidentes semejantes a los ocurridos dos años después.

Los granjeros están de acuerdo con que la tierra se distribuya, «pero no creo que corresponda a los veteranos tomarla; la distribución debe hacerse de forma ordenada», afirmaba recientemente, en el programa *Talking Point* de la BBC, Emmanuel Jamba, un granjero negro.

Como él hay otros, blancos y negros, que compraron las fincas, hoy ocupadas por los «veteranos», tras la independencia. Si no fuera por este detalle, la invasión de haciendas podría parecer justificada: a partir de 1890 los británicos fueron apropiándose de la tierra, por supuesto sin pagar indemnizaciones. Al final de las dos Guerras Mundiales, el Reino Unido gratificó también con tierras de Zimbabwe a los veteranos británicos de aquellas contiendas. Y siguiendo una política de apropiación y segregación similar a la de Sudáfrica, en 1978 los europeos poseían 423 hectáreas per capita frente a las 3,4 hectáreas per capita de los africanos.

No es de extrañar pues que una de las reivindicaciones de la lucha por la independencia fuera el reparto de la tierra. Por este motivo, el Acuerdo de Lancaster House de 1979, con el que se ponía fin a 13 años de conflicto armado, recogía el compromiso del Reino Unido de financiar la redistribución aunque no especificaba el período de dicho compromiso, ni el importe de la contribución.

De todos modos, la reforma no era sencilla: en el momento de la independencia, 6000 granjeros blancos poseían el 45% de la tierra de cultivo, y existían 4800 explotaciones agrícolas que abarcaban 15 millones de hectáreas, al tiempo que las antiguas reservas, ahora llamadas Tierras Comunes, albergaban a 700.000 familias en 16,3 millones de hectáreas. Las explotaciones agrícolas («blancas») eran una de las principales fuentes de ingresos del país; aunque su contribución al PIB se situaba alrededor de un 15%, suponía el 44% de las exportaciones. El gobierno del entonces recién elegido Robert Mugabe decidió pues seguir una política de «reconciliación» que evitase el éxodo de los granjeros blancos.

A resultas de lo cual, en 1990 todavía el 40% de las exportaciones del país provenía de las grandes plantaciones, especialmente de las de tabaco. En la actualidad, estas últimas proporcionan el 65% del empleo en el país (aunque los trabajadores agrícolas tienen los sueldos más bajos del país, inferiores incluso a los empleados de hogar) y el tabaco supone el 20% del PIB y el 40% de las exportaciones.

Pese a todo, se calcula que alrededor de 150.000 personas abandonaron el país entre finales de los setenta y principios de los ochenta (en 1965 la población blanca ascendía a 270.000 personas, en 1992 eran 90.000). Algunos de los europeos que se quedaron, siguieron aferrados a las costumbres de la época colonial en su trato para con los «nativos» y han mantenido esa extrañamente inmutable actitud paternalista característica de los colonos decimonónicos.

Por otro lado, en 1982 Zimbabwe había aceptado el Programa de Estabilización propuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI), a consecuencia del cual el presupuesto destinado a la redistribución de tierras pasó de Z\$ 28 millones en 1982-1983 a Z\$ 6 millones en 1983-1984. Incluso contabilizando las prometidas aportaciones de donantes era difícil cumplir la previsión de realojar a más de 162.000 familias. Las modificaciones (incremento en los impuestos y recortes presupuestarios) estipuladas por el FMI, desde que el país se aviniera en 1990 a un Programa de Ajuste

Estructural, no hicieron la tarea más sencilla.

Si a la escasez de fondos se le añade una actitud muy generalizada entre los funcionarios de «no hacer nada antes que equivocarse», se comprende que la reforma apenas avanzase. La lentitud, amén de los escándalos acerca de la adjudicación de tierras a miembros del Gabinete, llevaron al Reino Unido a suspender su contribución.

A partir de entonces, Mugabe ha solicitado una y otra vez a la 'comunidad de donantes', fondos para la reforma. Y cada negativa parece empujarle, sobre todo en los períodos pre-electorales, a buscar la manera de legalizar las expropiaciones forzosas.

En 1992, el Gobierno aprobó una Ley de Expropiaciones (Land Acquisition Act) que contemplaba las indemnizaciones basadas en las mejoras realizadas en cada propiedad, y no en el valor de mercado de la tierra. Con esta medida se pretendían obtener 11 millones de hectáreas. En 1995, tan sólo se habían adquirido 20 fincas de las más 100 seleccionadas para ese fin.

Pese a todas las medidas adoptadas, en trece años de independencia (1980-1997) el Gobierno sólo consiguió adquirir 3 millones de hectáreas y realojar a menos de 56.000 familias. En septiembre de 1998 volvió a celebrarse una reunión de donantes de la que Zimbabwe esperaba algo más que palabras, pero el apoyo financiero de la comunidad internacional siguió sin llegar.

Las siempre repetidas, y nunca atendidas, peticiones del Gobierno a la comunidad internacional se añaden a la ruinoso situación económica en la que se ha sumido el país, motivada también por su participación en la guerra de la R.D. de Congo, que además del gasto que supone, le ha valido la denegación de fondos y créditos del FMI y otros donantes.

En este contexto, tal vez sea posible comprender por qué el pasado 6 de abril de 2000 el Parlamento, en su mayoría diputados del ZANU (147 de 150), aprobaba con el voto a favor de los 100 diputados presentes una enmienda constitucional que sanciona las expropiaciones forzosas y responsabiliza al Reino Unido de su indemnización.

Pero la mera adquisición de tierras no solucionará el problema de la redistribución. Todavía hoy muchas de las tierras adquiridas siguen sin utilizarse y algunos de los programas han fracasado, no sólo por la lentitud en la transacción, sino por la falta de formación, infraestructura, servicios de distribución, créditos, etc. necesarios para convertir una explotación agrícola o ganadera en pequeñas granjas, o para que quienes han sido pequeños agricultores y ganaderos exploten grandes fincas.

Predicamentos

Tal vez el actual presidente de Zimbabwe se haya convertido en adicto al poder (lo cual no sería un caso inédito entre los mandatarios de todas las latitudes, incluidas las «democráticas»). Paradójicamente, si el Reino Unido se aviene a contribuir nuevamente a la financiación de la redistribución de tierras, le ayudará a conseguir votos en las próximas elecciones, ya que la interpretación de los hechos para muchos ciudadanos será que Mugabe, pese a su despotismo, sigue afanándose por el país y es capaz de plantar cara incluso a las grandes potencias occidentales.

En este sentido, creo que en la actualidad se infravalora, por no decir que pasa desapercibida, la creciente indignación de los africanos ante la soberbia occidental.

Y es que a nuestra prepotencia se le aprecian pies de barro cuando critica los errores ajenos, sin advertir siquiera la similitud que tienen con los propios (¿corrupción, nepotismo?); cuando pontifica sobre principios a los que no se atiene (¿reducir los presupuestos de defensa para invertir en sanidad y educación?).

Por otro lado, el legado de la época colonial no puede invalidarse con la mera obtención de soberanía (teórica, porque el mismo presupuesto nacional es supervisado por el FMI), sobre todo, cuando los responsables (los imperios coloniales) se eximen de su incumbencia, o peor aún aparentan cumplirla buscando en realidad su propio beneficio.

En cualquier caso, cargar las tintas sobre la megalomanía de Mugabe, o sobre las injusticias de la colonización no bastan para difuminar veinte años de promesas incumplidas. Y de forma más o menos consciente, esto es lo que hacen los medios de comunicación, cuando presentan Zimbabwe como un estado al borde del colapso y vuelven a exasperarme con titulares como el de *El País* del 19 de abril de 2000, «Las turbas matan a otro granjero blanco en Zimbabue», o con apostillas como la de Juan Ramón Lucas en *Informativos Tele5 20.30* el 18 de abril, «Y esto irá a peor, ya verán». Ante tales enunciados, cualquiera diría que los medios de comunicación se mueren por una guerra.

Estas salidas de tono remiten subrepticamente a una convicción expresada con cierto desafuero por 'El Conde de Montarco' en ABC el 5 de julio de 1998:

«La descolonización fue prematura y los nacionalismos creados fueron algo semejante a colocar una bomba cargada en las manos de un niño. Fue un disparate entregar la política y la economía a unas organizaciones tribales existentes como única estructura real.

»El resultado es el natural en casos semejantes: dictadores de bajo nivel político, corrupción escandalosa, destrucción de infraestructuras, ruina económica y genocidios brutales en luchas tribales. [...] Es necesario (sic) una tutoría para esos pueblos y dirigentes con mentalidad infantil».

¿Qué nos ha llevado en Occidente a tal presunción?

Los párrafos anteriores están incluidos en el libro *Pensando en Africa*, publicado por Icaria Editorial en 2000.